

11ª REUNION — 8ª SESION ORDINARIA — JULIO 5 Y 6 DE 1973

Presidencia de los señores diputados Salvador F. Busacca e Isidro J. Odena

Secretarios: doctor Alberto L. Rocamora y señor Ludovico Lavia

Prosecretarios: señores Manuel Rodríguez González
y Alberto Rodríguez Gallardo

DIPUTADOS PRESENTES:

ACEVEDO, Carlos Luis
ACUNA, Hipólito
AGUIRRE, Mario D.
AGUIRRE de SAIBENE, Luisa E.
ALVAREZ GUERRERO, Osvaldo
AMADO SALEME, José
AMAOLO, Mario O.
AMAYA, Mario Abel
AMERISE, José Carmelo
ARAGONES, Carlos Osvaldo
ARANA, Tomás Pedro
ARATA, Juan Carlos
ARBO, Tomás Ameghino
ARCE, Rodolfo Juvenio
ARIANI, Adriano
ARIGÓS, Ramón Eduardo
ARRAYA, Jorge Francisco
ARRÚE, Willebrordo
ASMAR, Ramón
AUYERO, Carlos Alberto Camilo
AVILA, Agustín Alfredo
AZURMENDI, Ernesto
BAJCZMAN, Raúl I.
BALESTRA, Ricardo Ramón
BARBARO, Julio D.
BARRIONUEVO, Roque R.
BARTOMIOLI, Héctor Luis
BEHERAN, Arnoldo Mario
BELLISIO, Victorio Alberto
BENEDETTI, Osvaldo Ernesto
BLANCO, Manuel
BONAS, Abraham Efraín
BONIFATTI, Arolinda S. A.
BORRAS, Raúl Antonio
BRAVO, Carlos Alberto
BRAVO, Federico S.
BRITO LIMA, Alberto
BUSACCA, Salvador F.
BUSTOS, Tomás Roberto
CABANA, Manuel I.
CABEZAS, José Humberto
CALABRESE, Pablo
CAMPBELL, Oscar S.
CAMPOS, Ernesto Manuel
CAMUS, Jorge M.
CAPILLO, José
CÁRDENAS, Juan Carlos
CARRAL TOLOSA, Humberto

CARRERAS, Ruperto B.
CASAZZA, Luis Angel
CASTELLANO, Hugo Luis
CATALANO, José Armando
CITATI, Angel
COLELLO, Clemente J.
COMINGUEZ, Juan Carlos
COSSY ISASI, Edgar
COSTARELLI, José
CROATTO, Armando Daniel
CROCCO, Luis Ferdinando
CHAQUIREZ de PALACIOS, Maria
D'ANGELO, Lorenzo Francisco
DAY, Alberto Ricardo
DE APARICI, Ricardo José Manuel
DE LUCA, Ricardo
DESPERBASQUES, Rodolfo Eduardo
DÍAZ ORTIZ, Santiago Francisco
EGUIREUN, Enrique
ESPECHE, Juan Bautista
ESPONDABURU, Raúl Horacio
ESQUIVEL, Faustino
ESTIGARRIA, Agustín Tomás
FADUL de SOBRINO, Esther Mercedes
FALABELLA, Francisco José
FALÚ, Ricardo Munir
FARIAS, Eduardo Isidro
FERNANDEZ, Dante Dionisio
FERNANDEZ, Juan Máximo
FERNANDEZ BEDOYA, Mariano
FERNANDEZ GILL, Guillermo Carlos
FERNANDEZ VALONI, José Luis
FERREYRA, Jorge Washington
FLORES, José María F.
FONTE, Carlos A.
FRANCO, Hugo Armando
FRESCHI, Pedro José
FUENTES, Pedro Alfredo
GAITAN, Adelmo Alberto
GALVAN, Raúl Alfredo
GALLO, Carlos R.
GANEM, Héctor
GARCIA, Luis Antonio
GARONA, Alberto A.
GARRE, Nilda Celia
GASS, Adolfo
GIMENEZ, Nicolás Alberto
GOLE, Tomás Juan B.
GONZALEZ, Ricardo A.
GRAU, Mario Agustín

GUALCO, Jorge Nelson
GUERRERO, Antonio Isaac
GUZMAN de ANDREUSSI, Maria Cristina
HAIEK, José
HARRINGTON, Luis José D.
HUEYO, Horacio
HUGHES, Gilbert
IMBAUD, Carlos Alfredo
INSUA, Carlos Raúl
ITURRIETA, Anibal A.
KELLY, Rodolfo Feliciano
KUNKEL, Carlos Miguel
LABAKE, Juan Gabriel
LASTIRI, Raúl Alberto
LAVALLE, Mario
LAZZARINI, José Luis
LENCINA, Luis A.
LEPEZ, Lysis Augusto
LIMA, Hugo Ramón
LITERAS, Maria Haydée Acevedo de
LÓPEZ, Domingo
LÓPEZ, Horacio Fidel
LOPEZ, Miguel Angel
LORENCES, Mariano Rufino
LUCENA, Luis Arnaldo
LUMELLO, José Erio
LLANO, Juan Pedro
LLORENS, Roberto Oscar
MACRIS, Antonio J.
MALDONADO, Clemente
MARINO, Rafael Francisco
MARQUEZ, Alfonso Carlos
MARTÍNEZ, Juan Antonio
MARTÍNEZ, Pedro Nicolás
MARTOS, Mario Saúl
MASSOLO, Eduardo A. R.
MASTOLORENZO, Vicente
MAUHUM, Fernando Hugo
MERA IGUEROA, Julio I.
MERCHENSKY, Marcos
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MIGUEL, Pedro Honorio
MIRA, Jesús
MOLINA, Gilberto H.
MOLINA, Manuel Isauro
MOLINA ZAVALIA, Armando
MOLINARI ROMERO, Manuel Ernesto
MOMBELLI, Fausto J.
MÓNACO, Horacio Miguel
MONSALVE, Evaristo A.

MONTERO TELLO, Régulo L.
MORAL, Ángel
MORENO, Antonio E.
MORENO FERRER, José Carlos W.
MORINI, María Teresa Merciadri de
MOYANO, Francisco J.
MUNIZ BARRETO, Diego
MUSACCHIO, Vicente Miguel
MUSSO, Eufemia
NARANJO, Decio B.
NATALE, Ricardo T.
NICOLICHE, Lisardo Oscar
NOSIGLIA, Plácido Enrique
ODENA, Isidro J.
OSELLA MUÑOZ, Enrique Emilio
PALACIO DEHEZA, Carlos
PARENTE, Rodolfo Domingo
PASCUAL, Paulino Rubén
PATALAGOITIA, Osvaldo E.
PAZ, Guido Ulises
PEDRINI, Ferdinando
PEREIRA, Antonio
PETRUCCELLI, Agustín
PONCE, Rodolfo Antonio
PORTERO, Héctor
PORTO, Jesús E.
RABANAL, Rubén Francisco
RACCHINI, Juan Nicolás
RAFAEL, Juan
RAMÍREZ, Juan Manuel
RATTI, Luis Carlos
RITVO, Miguel
RIZO, Eusebio Víctor

RODRIGUEZ, Alfredo S.
RODRIGUEZ FLORES, Argentina
ROJAS, Ramón Pablo
ROLANDO, Esteban Domingo
ROMÁN, Irene Graciela
ROMERO, Carlos Alberto
ROMERO, Juana N.
ROSAS, Alberto Horacio
ROTA, Silvana María I.
RUBEO, Luis
RUIZ VILLANUEVA, Arturo
SALIM, Luis
SALOMÓN, Jorge
SALVADOR, Nicolás
SALVATIERRA, Julio Domingo
SAMBUEZA, Osvaldo
SÁNCHEZ AHUMADA, Luis Alberto
SÁNCHEZ TORANZO, Nicasio
SANDLER, Héctor Raúl
SANGIACOMO, Ricardo Arturo
SANGUINETI, Virginia Luisa
SARBOLI, Rubén Juan
SARLI, Osvaldo Raúl
SAUL, Roberto
SERVINI GARCÍA, Clara Cristina
SILEONI, Nelo I.
SILVA, Analicio
SLAMOVITS, Ludovico
SOLANA, Jorge D.
STECCO, Alberto Eleodoro
SUÁREZ, Humberto F.
SUÁREZ, Leopoldo M.
SUELDO, Horacio Jorge

SULETA de ARRAYA, Arminda
TACHELLA, Eliberto Santos J.
TAGLIAFERRO, Jorge
TOLLER, Roberto Lino
TRABOULSI, Eduardo Elías
TRÓCCOLI, Antonio A.
TULA DURAN, Joaquín
URDÍNEZ de VOLPE, Clotilde Isolina
VACCAREZZA, Eduardo H.
VALENZUELA, Héctor R.
VALERI, Salvador
VÁZQUEZ POL, José
VERGARA, Roque Antonio
VESCO, José Luis
VIALE, Jorge Omar
VIDAÑA, Roberto
VILLALBA, Bernardo Samuel
VINI, Carmelo
VITTAR, Rodolfo Oscar
ZAMANILLO, José Miguel
ZAPATA, Hipólito Bernardo

AUSENTES, CON LICENCIA:

DAVICO, Miguel Ángel
GLELLEL, Jorge
LATRUBESSE, Francisco Alberto
SOBRINO ARANDA, Luis Alberto
SVRSEK, Enrique A.
VINARDELL MOLINERO, Miguel

AUSENTE, CON PERMISO:

VILLADA, Mario Anselmo

SUMARIO

1. — Versión taquigráfica. (Pág. 705.)

2. — Asuntos entrados:

I. — Comunicación de comisión. (Pág. 706.)

II. — Dictámenes de comisiones. (Pág. 706.)

III. — Peticiones particulares. (Pág. 706.)

IV. — Proyectos de ley:

1. — Del señor diputado **Benedetti**: modificación de los regímenes de declaración indagatoria, incomunicación, encarcelamiento preventivo y excarcelación establecidos en el Código de Procedimientos en materia penal. (Pág. 707.)
2. — Del señor diputado **Fariás**: salarios de los trabajadores que presten servicios como bomberos voluntarios. (Pág. 709.)
3. — Del señor diputado **Moral**: régimen de la asignación anual complementaria de vacaciones. (Pág. 710.)
4. — Del señor diputado **Balestra y otros**: régimen de las inversiones extranjeras. (Pág. 711.)
5. — Del señor diputado **Suárez (H.F.) y otros**: penalidades para los padres, adoptantes, tutores, guardadores y/o curadores que no cumplieran con las obligaciones dispuestas por la ley 1.420. (Pág. 717.)

6. — De la señora diputada **Rota y otros**: derogación de la ley 20.370, que dispone la confirmación del personal docente de la Dirección Nacional de Educación del Adulto. (Pág. 717.)

7. — Del señor diputado **Vergara y otros**: construcción del camino internacional a Chile por el paso cordillerano de Peñas Negras, provincia de La Rioja. (Pág. 718.)

8. — De los señores diputados **Colello y Toller**: paralización de las ejecuciones hipotecarias y prórroga de los vencimientos de las hipotecas no vencidas. (Pág. 719.)

9. — Del señor diputado **Freschi**: modificación del régimen de indemnización por accidente de trabajo. (Pág. 719.)

10. — Del señor diputado **Sandler y otros**: modificación del régimen de libertad provisional establecido en el Código de Procedimientos en materia penal. (Pág. 721.)

V. — Proyectos de resolución:

1. — Del señor diputado **López (H.F.) y otros**: pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el plan cuatrienal de obras y presupuesto por programa preparado por Agua y Energía, YPF, Gas del Estado, YCT, SEGBA y Comisión Nacional de Energía Atómica. (Pág. 722.)
2. — Del señor diputado **Bravo (F.S.) y otros**: pedido de informes al Poder

4

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

De la inversión extranjera

Artículo 1º — Serán consideradas inversiones de capitales extranjeros aquellas cuyos titulares sean personas físicas o jurídicas que ejerzan la dirección y el control efectivo de tales inversiones desde el extranjero.

Para la determinación del lugar desde el cual dicha dirección y control efectivo se ejerce, deberá tenerse en cuenta, respecto de las personas mencionadas:

—Lugar de constitución o incorporación de la sociedad.

—Sede principal de la dirección y administración.

—Lugar habitual de reunión de la asamblea de accionistas.

—Principales asientos de sus negocios.

—Vinculación jurídico-económica con otras empresas.

—Todo otro elemento que permita demostrar la procedencia extranjera de las decisiones que determinen la dirección y el control efectivo de las respectivas inversiones.

Objeto

Art. 2º — Son objeto de la presente ley aquellas inversiones de capitales extranjeros que se radiquen efectivamente en el país, en forma descentralizada de acuerdo a las prioridades determinadas en el planeamiento nacional, provincial y regional, en nuevas actividades económicas o en la ampliación o perfeccionamiento de las existentes, concurriendo a complementar el ahorro interno en el proceso de desarrollo nacional, y que se ajusten a las normas que se establecen en el presente ordenamiento.

Modos de inversión

Art. 3º — La inversión de capitales extranjeros podrá efectuarse en:

- a) Transferencia de divisas;
- b) Bienes de capital y sus repuestos;
- c) Capitalización de créditos externos;
- d) Utilidades provenientes de inversiones de capitales extranjeros, en condiciones de ser transferidas al exterior;
- e) Bienes inmateriales, de acuerdo con la legislación específica.

Las respectivas inversiones se instrumentarán mediante un convenio especial entre la sociedad receptora y el inversor extranjero que estará sujeto a la autorización del Poder Ejecutivo nacional.

De la autorización

Art. 4º — Las inversiones a que se refiere la presente ley, para gozar del tratamiento que la misma dispensa y del amparo de la legislación argentina, requerirán, en todos los casos, la previa autorización del Poder Ejecutivo nacional.

Pautas de evaluación

Art. 5º — A los efectos del otorgamiento de la autorización a que se refiere el artículo anterior, la

autoridad de aplicación deberá evaluar los respectivos proyectos de inversión de acuerdo a las pautas que a continuación se establecen:

1. La localización geográfica de la inversión.
2. La medida en que contribuyan, directa o indirectamente, a la obtención o economía de divisas.
3. La contribución al incremento de las exportaciones, dedicando parte substancial de su producción al mercado externo.
4. El compromiso de reinversión de utilidades y la política propuesta sobre transferencia de las mismas y repatriación de capitales.
5. La utilización de recursos naturales o insumos producidos en el país.
6. La medida y forma en que el mercado se encuentra atendido por empresas ya existentes.
7. La incorporación de moderna tecnología al patrimonio nacional.
8. La suficiencia de la inversión para garantizar la evolución de la actividad a que se destine.
9. La mayor utilización de técnicos y profesionales argentinos.
10. La actividad económica a la que se destine.
11. La importancia que para el país tenga como aporte de capital.
12. Las economías de escala derivadas de la inversión.

Sin perjuicio de la oportuna evaluación realizada de conformidad con las pautas enumeradas precedentemente, la autoridad de aplicación dará preferencia a aquellas inversiones que constituyan sociedad con empresas de capital nacional.

Límites a la autorización. — Exportaciones y pago de tecnología

Art. 6º — La autoridad de aplicación no dará trámite a propuestas que:

- a) Contengan limitaciones del inversor extranjero a la exportación de los productos a elaborar por la sociedad receptora de la inversión respectiva;
- b) Comprometan pagos por cualquier concepto de transferencia de tecnología de la sociedad receptora al inversor extranjero.

Registro

Art. 7º — En el Registro de Inversiones Extranjeras, que estará a cargo de la autoridad de aplicación de la presente ley, se incorporarán:

1. Todas las inversiones que se aprueben en virtud de las disposiciones de la presente ley, y los movimientos de fondos que les sean imputables.
2. Previa verificación del cumplimiento de los recaudos legales por la autoridad de aplicación:
 - a) Las inversiones aprobadas de acuerdo a las leyes 14.222, 14.780, 18.587 y 19.151, y los movimientos de fondos que les sean imputables;
 - b) Las radicaciones efectuadas al amparo de decretos y circulares que específicamente se refieran a inversiones de capital ex-

tranjero, en el período comprendido entre el 18 de diciembre de 1957 y la entrada en vigencia de la ley 14.780, y los movimientos de fondos que les sean imputables;

- c) Las inversiones ingresadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.222, al amparo de la Constitución y las leyes nacionales, y los movimientos de fondos que les sean imputables.

La inscripción en el registro precitado será requisito indispensable para que los respectivos inversores puedan gozar de los beneficios que establece el artículo 9º de la presente ley.

Tipo de cambio para la registración

Art. 8º — Las inversiones que se registren en virtud de la presente ley deberán serlo al tipo de cambio que rige en el mercado oficial, considerando:

- a) Para transferencias de divisas, la fecha de la remesa;
- b) Para los bienes de capital y sus repuestos, la fecha de su despacho a plaza. Para su determinación se tomará el valor corriente en divisas en el mercado de exportación o el vigente en el mercado interno del país de origen si fuera menor;
- c) Para la capitalización de créditos externos, el día de su capitalización;
- d) Para la inversión de utilidades, la fecha en que se efectúan;
- e) Para los bienes inmateriales, la fecha de su incorporación al Registro de Inversiones Extranjeras.

Beneficios

Art. 9º — El capital procedente del exterior que se invierta y registre en el país de acuerdo con la presente ley gozará de los siguientes beneficios:

- a) El inversor podrá transferir a partir del cierre del primer ejercicio de la empresa las utilidades líquidas y realizadas, hasta un porcentaje máximo anual del capital invertido, que se determinará por ley especial de acuerdo a los resultados que arroje el análisis de los datos obrantes en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y en las condiciones que se establezcan en oportunidad de aprobarse la inversión;
- b) Las utilidades no transferidas en ejercicio del derecho acordado por el inciso precedente podrán:
 1. Ser invertidas en la sociedad receptora de la inversión original o en otras sociedades receptoras, previa autorización del Poder Ejecutivo nacional.
 2. Ser depositadas a plazo fijo en el Banco Nacional de Desarrollo, vencido el cual, el inversor extranjero podrá disponer libremente de las mismas.
 3. Acumularse en una cuenta especial de reserva. Estas utilidades podrán transferirse al exterior en las condiciones que se establezcan en oportunidad de aprobarse la inversión. Las que definitiva-

mente no se remitieran podrán ser destinadas a cualesquiera de los demás objetos previstos en el presente inciso. En todos los casos deberá informarse a la autoridad de aplicación sobre la decisión adoptada y el estado del trámite respectivo.

- c) El inversor podrá repatriar el capital registrado previa comunicación a la autoridad de aplicación en los siguientes supuestos:

1. Cuando se cumplan las condiciones establecidas al ser aprobada la inversión. En todos los casos de repatriación del capital deberá asegurarse la continuidad de la actividad objeto de la inversión respectiva y especialmente de la fuente de trabajo por ella generada. Las modalidades de repatriación del capital serán establecidas por una ley especial, de acuerdo a los resultados que arroje el análisis de los datos obrantes en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
2. Cuando transfiera sus acciones o cuotas de capital a los adquirentes aludidos en el artículo 12, inciso b), de esta ley.
3. Cuando se liquide la sociedad receptora de la inversión extranjera.

Tipo de cambio para la transferencia de utilidades y repatriación del capital

Art. 10. — En los casos de los incisos a) y c) del artículo 9º, el tipo de cambio aplicable a las referidas operaciones será el tipo vendedor que rija en el mercado oficial al momento de efectuarse las mismas.

Crédito bancario

Art. 11. — La utilización de crédito bancario interno por parte de sociedades con mayoría de capital registrado se limitará al crédito a corto plazo o de evolución y a los créditos destinados al financiamiento de exportaciones.

De las acciones y su transferencia

Art. 12. — Las acciones o cuotas de capital correspondiente a la inversión registrada no podrán conferir voto múltiple a sus titulares y deberán ser nominativas durante los primeros cinco años. La firma inversora recibirá como contrapartida de su inversión, acciones o cuotas de capital de la sociedad receptora, a un valor no inferior al nominal. En todos los casos, podrán ser transferidas previa comunicación a la autoridad de aplicación, conforme a las siguientes modalidades:

- a) Cuando la transferencia se efectúe a favor de adquirentes que deseen conservar la pertinente inscripción en el Registro de Inversiones Extranjeras, dichos adquirentes deberán solicitar previamente a la autoridad de aplicación la autorización respectiva para realizar la operación;
- b) En el supuesto de que los nuevos adquirentes no hubiesen solicitado dicha autorización, como así mismo en el caso de que ésta fuese denegada por la autoridad de aplicación, la parte correspondiente al capital transferido será excluida del Registro de Inversiones Extranjeras.

Personal directivo

Art. 13. — Las sociedades receptoras de inversiones extranjeras aprobadas de acuerdo con la presente ley deberán emplear en las áreas de dirección, técnica y profesional, un porcentaje mínimo promedio del 85 % de argentinos.

La autoridad de aplicación podrá autorizar una proporción menor para los tres primeros años en los casos en que, por la naturaleza de la actividad, no pudiera obtenerse personal argentino especializado en las cantidades exigidas.

Publicidad

Art. 14. — Al iniciarse el trámite de inversión, deberá darse amplia publicidad a la propuesta, sin perjudicar el secreto comercial de los proponentes.

Verificaciones

Art. 15. — La autoridad de aplicación adoptará los recaudos necesarios para verificar el origen extranjero de los capitales que se inviertan, su correcta aplicación a los fines específicos de la inversión, como así mismo a fin de evitar que dichos capitales afecten el desenvolvimiento normal de las empresas locales preexistentes, cuya evolución debe asegurarse en orden a su capacidad y eficiencia.

Actividades militares

Art. 16. — La autoridad de aplicación no dará trámite a propuestas que se destinen a la producción de elementos directamente vinculados a las actividades militares, sin la intervención del Ministerio de Defensa.

Plazo de resolución

Art. 17. — El Poder Ejecutivo nacional deberá expedirse sobre las propuestas de inversión extranjera que se formulen, dentro de un plazo máximo de 180 días a contar de la fecha de su presentación. La reglamentación establecerá el procedimiento administrativo a que se sujetará la autoridad de aplicación para que el pronunciamiento del Poder Ejecutivo nacional sobre la inversión se dicte en el plazo establecido.

Acogimiento a otros regímenes

Art. 18. — Las sociedades incorporadas al régimen de la presente ley podrán acogerse a los regímenes de promoción sectorial o regional vigentes o que se dicten en el futuro, en las condiciones que los mismos indiquen. En tales casos, la acumulación de los respectivos beneficios no podrá colocarlos en mejor situación que las sociedades locales de capital no registrado.

Pérdida de derechos y sanciones

Art. 19. — El incumplimiento de las disposiciones del decreto aprobatorio de inversión, por causas imputables al inversor, dará lugar a la pérdida de los derechos que le acuerda esta ley y su eliminación del Registro de Inversiones Extranjeras, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones que pudieran corresponder dentro de los regímenes especiales propios de

cada inversión. A tal efecto, la autoridad de aplicación, previa comprobación de la circunstancia señalada, propondrá al Poder Ejecutivo nacional el dictado del correspondiente decreto.

Extensión de la responsabilidad

Art. 20. — La responsabilidad emergente de las obligaciones contraídas en el convenio de inversión por el inversor extranjero será asumida en forma conjunta y solidaria por dicho inversor extranjero en proporción al monto efectivo de su aporte.

Derecho aplicable y jurisdicción competente

Art. 21. — A la inversión extranjera le serán aplicadas las cláusulas contractualmente convenidas por las partes en el respectivo convenio y supletoriamente las normas en vigor del derecho argentino.

Solo serán competentes para entender en todas las divergencias entre las partes resultantes de la interpretación del convenio de inversión extranjera los tribunales federales de la República de la jurisdicción respectiva.

Inversiones anteriores

Art. 22. — El Banco Central de la República Argentina suspenderá las remesas al exterior por conceptos de repatriación de capital o transferencias de utilidades de inversiones anteriores hasta tanto una ley especial fije las respectivas modalidades para dichos casos. Sin perjuicio de ello, en todos los casos, habrá de respetarse los derechos adquiridos al amparo de la Constitución y la ley.

Autoridad de aplicación

Art. 23. — La reglamentación de la presente ley establecerá todo lo relativo a la autoridad de aplicación.

Derogación

Art. 24. — Quedan derogadas la ley 19.151 y todas las disposiciones legales que se opongan a la presente.

Art. 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ricardo Ramón Balestra. — Juan Pedro Llano. — Tomás Ameghino Arbo.

Señor presidente:

El proyecto que se acompaña procura establecer en forma coherente y clara el marco en que se desenvuelve y el contenido que regula la actividad inversora extranjera en el país.

La diversidad de tiempos en que se sancionaron la actual ley 19.151 y decreto 2.400/72 sobre la materia, como así mismo el encuentro en la tarea de su elaboración de criterios contradictorios, han determinado consecuencias negativas para la trascendente tarea de aplicación de ambos instrumentos jurídicos.

La necesidad de delimitar con precisión el concepto de la inversión extranjera, su objeto, modos de realizarse, autorización pertinente y criterios de su evaluación, entre otros aspectos salientes, vuelven necesarias las reformas proyectadas a los fines de otorgar la claridad y coherencia necesarias a las normas que legislan tan delicada temática.

De tal manera, habrá de contribuirse a lograr la finalidad propia del derecho internacional privado,

en el caso, en la materia de la inversión extranjera: dotar a las respectivas relaciones jurídicas de la certeza y seguridad necesarias, que afiancen sobre bases ciertas los derechos y obligaciones en cuestión.

A la vez, tales certeza y seguridad deberán conjungarse adecuadamente con los intereses del orden público local, de modo tal que las previsiones legales correspondientes permitan a la autoridad de aplicación velar por la defensa de tales intereses, sin desmedro de los derechos del inversor.

Es así que, a los fines enunciados, que ya cuentan con un instrumento idóneo para su logro —el Registro de Inversiones Extranjeras—, sea necesario ordenar debidamente las prescripciones legales y reglamentarias que, reunidas bajo un mismo espíritu, abarquen y sistematicen armónicamente la completa gama de modalidades en que actúa el inversor extranjero.

Para ello, se ha agrupado el tratamiento legal del siguiente modo: se define primero el concepto de inversión extranjera (artículo 1º); luego su objeto (artículo 2º) y modos de realizarse (artículo 3º); se establece aquí la necesidad del convenio de inversión entre el inversor extranjero y la sociedad receptora como forma instrumental adecuada a la determinación cierta de los respectivos derechos y obligaciones; se legisla a continuación sobre el requisito de la autorización (artículo 4º), pautas de evaluación (artículo 5º) y límites a la autorización (artículo 6º).

Seguidamente se trata el Registro de Inversiones Extranjeras (artículo 7º) y el tipo de cambio para la registración (artículo 8º). Luego, y de manera semejante, se hace lo propio con los beneficios que otorga la ley (artículo 9º) y el tipo de cambio para la transferencia de utilidades y repatriación del capital (artículo 10º).

Se dedican artículos específicos a la utilización de crédito bancario interno por parte de sociedades con mayoría de capital registrado (extranjero) (artículo 11); al régimen de las acciones y su transferencia correspondientes a tal capital (artículo 12); al personal directivo de las sociedades receptoras de inversiones extranjeras (artículo 13); a la publicidad del trámite de la inversión (artículo 14); a la verificación del origen extranjero de los capitales (artículo 15); a la limitación respecto a propuestas destinadas a actividades militares (artículo 16); al plazo de resolución para el Poder Ejecutivo respecto de propuestas de inversiones extranjeras (artículo 17); al sistema de acogimiento por inversores extranjeros a otros regímenes de promoción (artículo 18); a la pérdida de derechos y sanciones (artículo 19), y a la autoridad de aplicación del sistema legal en la materia (artículo 20).

A los efectos de la determinación del concepto de inversión extranjera, se ha seguido la concepción más amplia del control efectivo sobre las decisiones que hacen a la actividad inversora.

Puede superarse así la ambigüedad del criterio de nacionalidad de las sociedades, rechazado expresamente en nuestro país por la tesis expuesta por Bernardo de Irigoyen en el caso del Banco de Londres y Río de la Plata (1876) y acogida a su vez en numerosos países latinoamericanos.

Por otra parte, es el criterio del domicilio, y no el de la nacionalidad, el que regula la actuación de las personas físicas y jurídicas en la legislación de nuestros códigos Civil y Comercial, como así mismo en los respectivos tratados de derecho internacional privado de Montevideo de 1889 y 1940, suscritos por

nuestro país Bolivia, el Paraguay, el Uruguay, el Perú, Chile, Colombia y el Brasil.

No obstante, la actividad societaria en ciertas materias vitales para la economía del país —bancos, compañías de seguros, sociedades anónimas y derecho de inversión— adquiere una trascendencia tal que desborda el ámbito local del domicilio constituido por ciertas agencias sucursales o establecimientos de sociedades multinacionales.

De ahí que, en tales hipótesis y a los efectos de determinar los efectos jurídicos propios de cada legislación específica, sea necesario precisar, respecto de tales sociedades, su relación con otras sociedades extranjeras, que la característica de su accionar económico demuestra.

En el caso que nos ocupa de la inversión extranjera, la determinación del carácter de la misma a través de sus titulares se hace, pues, siguiendo el principio de la dirección y control efectivo ejercido sobre la misma.

Si tal dirección o control se ejerce desde el extranjero, la respectiva inversión será también extranjera.

En cuanto a las pautas a seguir, a fin de localizar la procedencia de las decisiones, se arbitra, además de los puntos de conexión o asientos habituales en la materia, el antedicho criterio de la vinculación jurídico-económica con otras sociedades y en general todo otro elemento que permita demostrar la procedencia extranjera de las decisiones respectivas (artículo 1º del proyecto).

En lo que hace al objeto de las inversiones extranjeras, se determina el mismo conforme al principio de radicación efectiva en el país (artículo 2º). Por el juego de tal disposición y la del artículo 12 sobre transferencia de las acciones, tal radicación efectiva surge del aporte real al capital de una sociedad, cuya contrapartida es la emisión de nuevas acciones por la sociedad receptora. Criterio semejante ha seguido el Acuerdo de Cartagena, al definir para los países del Pacto Andino el concepto de inversión extranjera directa (véase artículo 1º del «régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros»).

A los efectos del acogimiento por el inversor extranjero a los beneficios legales, se establece el requisito de la previa autorización para todo tipo de inversiones (artículo 4º) en un artículo expreso, separado de las pautas de evaluación.

Respecto de éstas, se las enumera en un orden prioritario según su importancia, aunque sin otorgar a dichas prioridades el carácter de condiciones necesarias en su conjunto para la autorización de las inversiones respectivas (artículo 5º); tales condiciones surgen del objeto de la inversión extranjera, precisado en el artículo 5º.

En cuanto a la preferencia por la «asociación con capital nacional», enunciada en los artículos 1º y 4º de la ley 19.151, y 16 del decreto 2.400/72 de un modo algo confuso y contradictorio, se precisan dos aspectos principales: uno terminológico a la vez que substancial (la preferencia a las inversiones que constituyan sociedad con empresas de capital nacional) y otro de carácter aclaratorio.

Al precisarse la terminología, se decide una cuestión de fondo o substancial, cual es la de preservación, ampliación o perfeccionamiento de la empresa de capital nacional ya en marcha. Al efecto de precisar el concepto de empresa de capital nacional, cabrá recurrir en esta hipótesis a los criterios fijados por la ley 18.375, de «compre nacional».

Ello en virtud de que ya se habla de «constituir sociedad», y, por lo tanto, se sujeta el concepto de empresa (no definido en nuestra legislación general) a su encuadre bajo la forma societaria.

El segundo aspecto aclaratorio aludido que se precisa en el proyecto de ley y que, según los textos vigentes de la ley 19.151 y de su decreto reglamentario resulta dado por instrumentos de distinta jerarquía normativa, es el del carácter subsidiario de la pauta referida de la preferencia para la asociación con empresas de capital nacional.

Dicho carácter hace que tal preferencia no desplace el análisis del resto de las pautas, que son también de vital importancia para conjugar el aporte efectivo de la inversión con el proceso de nuestro desarrollo.

En lo que hace al proyectado artículo 6º, se establecen límites precisos a la autorización, en materia de reservas eventuales, que puede imponer el inversor extranjero a la sociedad receptora de su inversión, en dos materias fundamentales: la primera, sobre exportación de productos a elaborar. Debe observarse que el artículo 7º, inciso b), de la ley 19.151 ya establece la prohibición de imponer limitaciones a la exportación en forma genérica. Ahora se precisan los dos sujetos que podrían, respectivamente, imponer dicha limitación —el inversor extranjero— y verse limitada en su capacidad de exportar —la sociedad receptora. La segunda materia, fundamental, es la relacionada con el pago, por cualquier concepto, de transferencia de tecnología de la sociedad receptora al inversor extranjero. En ese aspecto, los pagos de regalías redundan en un sensible detrimento para nuestro balance de pagos, además de una disminución correlativa del aporte de la inversión en bienes inmateriales. Si tal inversión realizada en la sociedad receptora consiste precisamente en tecnología, no hay razón en sujetarla a las características jurídicas de un préstamo o locación, cuando de lo que se trata es precisamente de un aporte al capital de la sociedad local.

Por otra parte, tal es el criterio seguido por las legislaciones más modernas (Acuerdo de Cartagena, «régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros», artículo 21, y ley 4.131, modificada por la ley 4.390, del Brasil, artículo 14, en nuestra América latina) y aplicado en el reciente convenio firmado por el Ministerio de Industria y las firmas Saab-Scania A.B., de Suecia, Saab-Scania S.A., de la Argentina, Cametal S.A. y Preti, Vázquez, Iglesias S.A., homologado por decreto 6.564/72.

El proyecto precisa en sus artículos 7º y 8º el régimen relativo al Registro de Inversiones Extranjeras y al tipo de cambio para la registración. Por el primero de dichos artículos, el 7º, se procura establecer, con carácter legal, cuáles son las inversiones registrables automáticamente y cuáles bajo el requisito de la previa autorización. Se resuelve así una materia de muy dudosa interpretación, a la luz del artículo 20 del decreto 2.400/72, y de gran importancia en el mecanismo de la ley. De la inscripción en el registro antedicho derivan precisamente los derechos del inversor extranjero al reconocimiento del origen externo de su capital, a repatriar el mismo y a transferir sus utilidades.

En cuanto al tipo de cambio para la registración (artículos 2º de la ley 19.151 y 8º, también, del proyecto), se mantienen los criterios del texto vigente, aunque usando la expresión «inversión de utilidades,

en lugar de reinversión de utilidades, de conformidad con la redacción dada por los artículos 2º, inciso d), de la ley 19.151, y 3º, inciso d), del proyecto.

Dados el carácter condicionante de la inscripción en el registro para acogerse a los beneficios de la ley, y la naturaleza intangible del aporte tecnológico, el tipo de cambio para la registración de los bienes inmateriales resultará de la fecha de su incorporación al Registro de Inversiones Extranjeras.

El artículo 8º del proyecto trata de los beneficios que reconoce la ley a las inversiones de capitales extranjeros.

Se distingue en ellos, por una parte, la transferencia de utilidades líquidas y realizadas en las condiciones establecidas al aprobarse la inversión, y por la otra la repatriación del capital.

Con relación a las utilidades, se aclaran los posibles destinos de aquéllas, respecto de las cuales el inversor no ejerza su derecho de transferirlas al exterior: I) Inversión en la sociedad receptora de la inversión original o en otras sociedades receptoras, previa autorización del Poder Ejecutivo nacional, conforme al criterio general establecido en el artículo 6º de este proyecto; II) Depósito a plazo fijo en el Banco Nacional de Desarrollo, y III) Acumulación en una cuenta especial de reserva; esta última hipótesis, prevista en el artículo 4º del decreto 2.400/72, se incorpora a la ley, dada su importancia para el inversor extranjero, en primer término; como así mismo, en razón de tratarse de uno de los posibles destinos —de sus utilidades no transferidas—, lo que, metodológicamente y jerárquicamente, corresponde ser tratado juntamente con los restantes destinos previstos en la misma ley.

En cuanto a la repatriación, se establece que la misma se ha de limitar al capital registrado, a la vez que se determinan los supuestos para tal repatriación:

I) Cumplimiento de las condiciones según las que se aprobó la inversión.

II) Transferencia de acciones o cuotas de capital a adquirentes que no deseen conservar su inscripción en el Registro de Inversiones Extranjeras, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 12, inciso b), de este proyecto, y

III) Liquidación de la sociedad receptora de la inversión extranjera. Se difieren los límites y modalidades de la repatriación del capital y transferencias de utilidades a la sanción de una ley especial, una vez que los datos respectivos, que deberán surgir del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, permitan contar al efecto con un criterio más claro acerca de las características históricas y presentes de la actuación del capital extranjero en la Nación. Se asegura así mismo, en el caso de repatriación, la continuidad empresarial y el mantenimiento de la fuente de trabajo.

El artículo 10 legisla sobre el tipo de cambio aplicable a la transferencia de utilidades y repatriación del capital.

Tal previsión no había sido realizada por la ley 19.151, dejando así un vacío significativo en la determinación cambiaria aplicable a las transferencias de divisas al exterior.

Siguiendo el mismo criterio establecido en el artículo 8º, al determinar el tipo de cambio para la registración, se toma en cuenta el tipo vigente en el mercado oficial al tiempo de efectuarse la operación respectiva.

De tal manera, se determina con certeza la referencia cambiaria, según la cual deberán convertirse en moneda extranjera los capitales invertidos o sus utilidades, al tiempo de su remisión al exterior.

Por el artículo 11 se modifica el texto de la ley vigente (artículo 12) relativo a la utilización de crédito bancario por parte de empresas con mayoría de capital extranjero. Se cambian los términos «empresas con mayoría de capital extranjero», por «sociedades con mayoría de capital registrado» en razón de la imprecisión del contenido jurídico del término «empresa», a la vez que por la mayor exactitud del término «registrado», en la economía de la ley.

De la registración de las inversiones derivarán sus beneficios correlativos, en cuanto se trate precisamente de inversiones extranjeras que, en el caso contrario, de no hallarse registradas, no podrían acogerse a dichos beneficios. Además, se elimina la limitación cuantitativa al otorgamiento de crédito —50 % del capital registrado más las reservas acumuladas— por entenderse que la misma está sujeta a variaciones circunstanciales, pudiendo en consecuencia resultar en algunos casos demasiado amplia y en otros excesivamente restrictiva.

Se ha entendido, por otra parte, que en razón de tales características coyunturales de la política crediticia bancaria, la regulación de la misma debería quedar reservada a su organismo específico de aplicación.

En el artículo 12 se trata de las acciones o cuotas de capital correspondientes a la inversión registrada y su transferencia.

Al respecto, se especifica el requisito de entrega de acciones a la firma inversora como contrapartida de su inversión y a un valor no inferior al nominal.

Adquiere de tal modo contenido práctico el principio de radicación efectiva establecido, según el artículo 2º del proyecto, para las inversiones extranjeras.

Además se introducen nuevas modalidades para la transferencia de las acciones antedichas, con la finalidad de obtenerse un adecuado conocimiento por la autoridad de aplicación del capital acogido al régimen legal de inversiones extranjeras.

Así es que se prevé el requisito de la autorización para los adquirentes de las acciones que deseen conservar la pertinente inscripción en el registro. Y, para el supuesto de que aquéllos no soliciten la autorización respectiva, se contempla la exclusión del registro de inversiones de la parte correspondiente al capital transferido.

El artículo 13 proyectado mantiene, respecto del personal directivo de las sociedades (se utiliza este término en el proyecto en lugar de «empresas», por las mismas razones mencionadas con anterioridad al tratar el artículo 11), el texto del artículo 14 de la ley vigente, con dicha modificación.

A partir del artículo 14 se trata del procedimiento a seguir respecto de las propuestas de inversiones extranjeras.

Dicho artículo del proyecto mantiene el texto del artículo 6º de la ley, alterando su ubicación por la razón de método apuntada: tratamiento conjunto de los diferentes aspectos procesales vinculados al trámite de proyectos sobre inversiones extranjeras.

En cuanto a la referencia a los plazos para formular reclamaciones fundadas sobre las propuestas, se elimina del texto del proyecto por ser materia reservada al proyecto de reglamentación.

El artículo 15 se refiere a las verificaciones a realizar por la autoridad de aplicación respecto del origen extranjero de los capitales que se inviertan, su aplicación a los fines específicos de la inversión (hasta aquí se mantiene la redacción del artículo 3º de la ley), con un párrafo más destinado a preservar el desenvolvimiento normal de las empresas locales preexistentes según su capacidad y eficiencia. Este último párrafo ha sido tomado del artículo 6º de la ley 14.780, con el fin de dar cumplimiento procesal al necesario contralor de la pauta de evaluación establecida en el artículo 5º, inciso 6º, del proyecto, para los respectivos proyectos de inversión: la medida y forma en que el mercado local se encuentra atendido por empresas ya existentes.

El artículo 16, relativo a propuestas de inversión vinculadas a actividades militares, mantiene la redacción del artículo 7º, inciso a), de la ley.

Tampoco sufre modificaciones el texto del artículo 16 de la ley vigente en la versión proyectada del artículo 17, sobre plazo de resolución establecido, para que el Poder Ejecutivo nacional se expida sobre las propuestas de inversión.

Similar situación se da, respecto del artículo 18 del proyecto, relativo a la posibilidad para las sociedades incorporadas al régimen proyectado de acogerse a otros regímenes de promoción (texto del artículo 11 de la ley vigente), al que se agrega que la acumulación de beneficios no podrá perjudicar a inversores locales.

El artículo 19 del proyecto regula la pérdida de derechos y sanciones aplicables al inversor por incumplimiento de las disposiciones del respectivo decreto aprobatorio de su inversión. Dicho texto es el mismo del artículo 7º del decreto 2.400/72, al que ahora se quiere otorgar fuerza legal, dada la índole sancionatoria de la materia tratada. Los artículos 20 y 21 receptan los significativos avances logrados en el convenio con Saab-Scania en materia de extensión de la responsabilidad al inversor extranjero por las obligaciones derivadas del respectivo convenio —con lo que se impide todo nuevo caso Deltec— y la aplicación del derecho y jurisdicción argentina a toda la materia de la inversión en el país.

El artículo 22 establece una norma de derecho transitorio para las inversiones anteriores, suspendiendo sus remesas al exterior, hasta tanto una ley especial fije las modalidades de aquéllas. A la vez se preserva el principio constitucional de los derechos adquiridos en virtud de regímenes anteriores. Por último, el artículo 23 del proyecto de ley reserva a la reglamentación —al igual que el artículo 17 de la ley vigente—, todas las previsiones relativas a la autoridad de aplicación.

Los artículos 24 y 25 se refieren a la derogación del texto vigente y a la fórmula de cierre del articulado.

De tal modo, vuestra honorabilidad, se procura una redacción armónica y homogénea en el texto proyectado, que satisfaga los requerimientos de certeza y claridad legal del régimen de inversiones extranjeras, a los fines de su eficaz y correcta aplicación.

Sin perjuicio de que el mismo pueda sufrir otras modificaciones más significativas en el futuro, las proyectadas constituyen el mínimo necesario para una eficiente aplicación del precitado régimen de inversiones extranjeras, estructurado hoy en torno de un

sistema por primera vez puesto en práctica en nuestro país: la registración de los capitales extranjeros.

A tal eficaz funcionamiento, colocado al servicio tanto del interés nacional como de los legítimos derechos del inversor extranjero, tienden las normas proyectadas.

Ricardo Ramón Balestra. — Juan Pedro Llano. — Tomás Ameghino Arbo.

—A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas.

5

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Agrégase a la ley 13.944 el siguiente artículo:

Artículo 1º bis — En las mismas penas del artículo anterior incurrirán los padres, adoptantes, tutores, guardadores y/o curadores que no cumplieren con las obligaciones impuestas por la ley 1.420.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Humberto F. Suárez. — Ricardo Ramón Balestra. — Horacio Hueyo. — Clemente J. Colello. — Roberto Lino Toller. — Fausto J. Mombelli. — Tomás Ameghino Arbo. — Federico S. Bravo. — Régulo L. Montero Tello.

Señor presidente:

Se presenta en nuestro país desde hace muchos años, como uno de los problemas más graves de la educación el de la ausencia y deserción escolar.

Por diversos y variados medios, tanto autoridades nacionales como provinciales han procurado encontrar una solución a la situación señalada sin que, de acuerdo a los informes oficiales dados a publicidad, se haya podido concretar.

La gravedad del problema llevó a que, entre otras razones, el Honorable Congreso de la Nación sancionara la ley 1.420, por la cual se impuso la instrucción primaria obligatoria y gratuita, disponiéndose, a través de sus artículos 20 y 44, inciso 8º, sanciones pecuniarias para los responsables de la infracción a la norma de obligatoriedad mencionada.

La falta de eficacia de las sanciones previstas en la ley ha quedado demostrada por los informes oficiales, a través de los cuales se deduce que la deserción y ausencia escolar han ido en aumento año a año, encontrándose el Estado impotente para solucionar esta seria anomalia.

Esta situación nos lleva a presentar este proyecto de ley que prevé la imposición de penas corporales contra los padres, adoptantes, tutores, guardadores y/o curadores de los menores beneficiarios de la enseñanza, en procura de que los obligados cumplan de una vez por todas con algo que es uno de los más preciados bienes de una sociedad moderna, cual es la educación del pueblo, como meta primordial para alcanzar la superación y mejoramiento del que es único y principal merecedor.

La indolencia de quienes han restado importancia a esta función primordial del Estado, la educación, será de ahora en más pagada con el precio de la libertad.

La debida colaboración para con la Nación ante el serio problema que afronta la educación del pueblo debe ser impuesta y exigida por el Estado como primer responsable, y deben pagar con la privación de la libertad quienes por razones no justificadas no hacen posible que aquél cumpla con tal obligación, provocando además graves y serios perjuicios al país.

Excesivas distancias, ausencia de escuelas dentro de un radio prudencial o el estado real de indigencia serán las únicas causales de justificación a los fines del cumplimiento de esta ley.

En el año 1950 el Honorable Congreso de la Nación dictó la ley 13.944, llamada de asistencia familiar, imponiendo penalidades a quienes no prestaran asistencia a familiares o personas que les están vinculadas por distintas razones. Dentro del espíritu de dicha ley, y como uno de los elementos más importantes que conforman la familia, está el deber de educar.

Ello significa que, dentro de lo que es el sentido de la expresión «asistencia familiar», debe —sin lugar a dudas— estar incluida la asistencia educativa.

Es por ello que no encontramos lugar más feliz para ubicar las sanciones que proponemos para los infractores a la ley 1.420, que en la ley 13.944, ya incorporada al Código Penal, haciendo pasibles a los mismos de las penas y disposiciones de esta última norma.

Estimamos, señor presidente, que con la sanción de este proyecto hemos de hacer un importante aporte a la educación de todos los habitantes del país y hemos de dar al poder administrador la herramienta necesaria para imponer el cumplimiento de uno de los más serios y trascendentes deberes a que estamos obligados todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional.

Humberto F. Suárez. — Ricardo Ramón Balestra. — Horacio Hueyo. — Roberto Lino Toller. — Clemente J. Colello. — Fausto J. Mombelli. — Régulo L. Montero Tello. — Federico S. Bravo. — Tomás Ameghino Arbo.

—A las comisiones de Educación y de Legislación Penal.

6

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Derógase la llamada ley 20.370, que dispone la confirmación de personal docente dependiente de la Dirección Nacional de Educación de Adultos.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Silvana María I. Rota. — Carlos Alberto Camilo Auyero. — Anibal A. Iturrieta. — Clotilde Isolina Urdinez.

Señor presidente:

La norma legal cuya derogación se propicia establece una situación de privilegio para un sector muy limitado de la docencia argentina, al excluirlo de las exigencias que la ley 14.473 (Estatuto del Docente) determina para el ingreso y promoción en la carrera docente, con la agravante de que a la fecha de su dictado se encontraban constituidas las juntas de clasificación para esa rama de la enseñanza, excluyéndose de este modo su intervención.